



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA*

CCPR/C/91/D/1533/2006
4 de diciembre de 2007

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
91º período de sesiones
15 de octubre a 2 de noviembre de 2007

DICTAMEN

Comunicación N° 1533/2006

<i>Presentada por:</i>	Sr. Zdenek y Sra. Milada Ondracka (representados por un abogado, el Sr. James R. Shaules)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Los autores
<i>Estado Parte:</i>	La República Checa
<i>Fecha de la comunicación:</i>	17 de abril de 2006 (comunicación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 4 de diciembre de 2006 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	31 de octubre de 2007
<i>Asunto:</i>	Discriminación basada en la ciudadanía respecto de la restitución de bienes

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Cuestiones de procedimiento: Abuso del derecho a presentar una comunicación

Cuestiones de fondo: Igualdad ante la ley e igual protección de la ley

Artículo del Pacto: Artículo 26

Artículo del Protocolo

Facultativo: Artículo 3

El 31 de octubre de 2007, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación Nº 1533/2006.

[Anexo]

Anexo

**DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR
DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-91º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 1533/2006*

Presentada por: Sr. Zdenek y Sra. Milada Ondracka (representados por un abogado, el Sr. James R. Shaules)

Presuntas víctimas: Los autores

Estado Parte: La República Checa

Fecha de la comunicación: 17 de abril de 2006 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 31 de octubre de 2007,

Habiendo concluido el examen de la comunicación N° 1533/2006, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Zdenek y la Sra. Milada Ondracka, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito los autores de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sra. Christine Chanet, Sr. Maurice Glélé Ahanhanzo, Sr. Yuji Iwasawa, Sr. Edwin Johnson, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rajsoomer Lallah, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sra. Iulia Antoanella Motoc, Sr. Michel O'Flaherty, Sr. José Luis Pérez Sánchez-Cerro, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Ivan Shearer y Sra. Ruth Wedgewood.

Se adjunta al texto del presente dictamen una opinión disidente firmada por el Sr. Abdelfattah Amor, miembro del Comité.

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1. Los autores de la comunicación (de fecha 17 de abril y 14 de agosto de 2006) son el Sr. Zdenek Ondracka y la Sra. Milada Ondracka, ciudadanos de los Estados Unidos y de la República Checa, nacidos en 1929 y 1933, respectivamente, en la antigua Checoslovaquia y residentes en la actualidad en los Estados Unidos. Afirman ser víctimas de una violación por la República Checa del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). Están representados por un abogado, el Sr. James R. Shaules.

1.2. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Protocolo Facultativo) entró en vigor en la República Checa el 22 de febrero de 1993.

Los hechos expuestos por los autores

2.1. Durante el régimen comunista, los autores compraron una parcela de terreno en Uherske Hradiste (República Checa) donde construyeron su casa con ayuda financiera y física de la familia. Como consecuencia de la represión política del régimen comunista, los autores, utilizando pasaportes checoslovacos, salieron de Checoslovaquia en 1981 para pasar 21 días de vacaciones en Bulgaria y Yugoslavia, de donde no regresaron en la fecha prevista. Ulteriormente, y sin autorización de los poderes públicos, emigraron a los Estados Unidos. En 1982, un tribunal de Checoslovaquia los condenó en rebeldía a una pena de tres años de prisión y a la confiscación de su propiedad por haber abandonado el país. En 1988, los autores obtuvieron la ciudadanía estadounidense. En virtud de un tratado de naturalización entre los Estados Unidos y Checoslovaquia de 1928, los autores perdieron la ciudadanía checoslovaca.

2.2. En 1991, el Gobierno de la República Checa aprobó la Ley N° 87/1991 de rehabilitación extrajudicial en la que se especificaban las condiciones para la restitución de los bienes confiscados a las personas durante el régimen comunista. Según esa ley, para tener derecho a la restitución de sus bienes los reclamantes debían, entre otras cosas: a) ser ciudadanos checoslovacos, y b) tener residencia permanente en la República Checa. Estos requisitos debían cumplirse durante el período previsto para presentar la solicitud de restitución, entre el 1° de abril y el 1° de octubre de 1991. Mediante sentencia de 12 de julio de 1994 (N° 164/1994), el Tribunal Constitucional de la República Checa anuló la condición de la residencia permanente y estableció un nuevo plazo de presentación de las solicitudes, del 1° de noviembre de 1994 al 1° de mayo de 1995, para las personas que en virtud de esa decisión obtuvieran el derecho a solicitar la restitución.

2.3. En 1991, de conformidad con la Ley N° 119/90 y, por decisión de un tribunal checo (N° Rt 177/91-4), los autores fueron rehabilitados y se anularon las consecuencias de la sentencia condenatoria. El 31 de octubre de 1995, los autores solicitaron ante el tribunal de distrito de Uherske Hradiste la restitución de sus bienes confiscados. Ese tribunal desestimó su demanda de restitución el 4 de febrero de 1998 (N° 5C 224/95-29) aduciendo que no cumplían el requisito de la ciudadanía durante el período en que podían presentarse las nuevas solicitudes de restitución (que venció el 1° de mayo de 1995). Los autores no impugnaron la decisión desestimatoria de su demanda de restitución, puesto que se les señaló que la pretensión de impugnar la decisión del tribunal no prosperaría. La razón de ello era que el Tribunal Constitucional de la República Checa ya se había pronunciado (Pl. US 33/96-41, documento K) confirmando la constitucionalidad de la aplicación discriminatoria del párrafo 1 de la Ley N° 87/1991 en un caso

configurado por hechos sustancialmente idénticos, y ya había resuelto en el caso N° 185/1997 que era razonable el requisito de la ciudadanía para la restitución. Por consiguiente, los autores sostienen que habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles y efectivos.

La denuncia

3. Los autores afirman ser víctimas de una violación del artículo 26 del Pacto, ya que el requisito de ciudadanía previsto en la Ley N° 87/1991 constituye una discriminación ilícita. Los autores invocan la jurisprudencia del Comité en relación con los casos *Adam c. la República Checa*, *Blazek c. la República Checa*, *Marik c. la República Checa* y *Kriz c. la República Checa*, en los que el Comité constató una violación del artículo 26 por el Estado Parte.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1. El 1° de junio de 2007, el Estado Parte formuló observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. Impugnó la admisibilidad de la comunicación aduciendo que constituía un abuso del derecho a presentar comunicaciones en el sentido del artículo 3 del Protocolo Facultativo. El Estado Parte invoca la jurisprudencia del Comité, en particular en el caso *Gobin c. Mauricio*¹. En el presente caso, el Estado Parte aduce que los autores presentaron una petición al Comité el 17 de abril de 2006, es decir, ocho años y dos meses después de la sentencia del tribunal de distrito de Uherske Hradiste, de 4 de febrero de 1998, sin dar explicación alguna sobre el intervalo de tiempo transcurrido.

4.2. El Estado Parte recuerda que los autores no obtuvieron la ciudadanía checa hasta el 23 de junio de 2000. Sostiene que no fueron objeto de un trato diferente, sino que fueron tratados de la misma forma que todas las demás personas que no cumplían el requisito de la ciudadanía al 1° de octubre de 1991, según lo previsto en la Ley N° 87/1991. Como los autores no adquirieron la ciudadanía de la República Checa hasta el 23 de junio de 2000, no cumplieron esa condición. Según el Estado Parte, esta es la interpretación jurisprudencial de la ley, confirmada asimismo por el Tribunal Supremo.

4.3. El Estado Parte hace referencia, además, a sus observaciones anteriores en casos semejantes y señala que su normativa en materia de restitución, en particular la Ley N° 87/1991, tenía dos objetivos: por un lado, mitigar las consecuencias de las injusticias cometidas durante el régimen comunista y, por otro lado, llevar a cabo una amplia reforma económica con el fin de implantar una economía de mercado eficiente. Como que no era posible reparar todas las injusticias cometidas anteriormente, se establecieron condiciones previas restrictivas, en particular la de la ciudadanía, cuyo principal objetivo era incitar a los propietarios a ser muy cuidadosos con los bienes durante el proceso de privatización. Según el Estado Parte, el requisito de ciudadanía ha estado siempre en conformidad con el orden constitucional de la República Checa, y así lo han declarado tanto el Parlamento como el Tribunal Constitucional.

¹ Comunicación N° 787/1997; decisión de inadmisibilidad de 16 de julio de 2001, párr. 6.3.

4.4. Por último, el Estado Parte destaca que la Ley N° 87/1991, además del requisito de ciudadanía, establecía otras condiciones que habían de cumplir los solicitantes para que prosperaran sus demandas de restitución. En particular, una de las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 5 de la ley consistía en que la persona que cumpliera los requisitos necesarios debía exhortar a quien correspondiere a la restitución del bien en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de dicha ley, es decir, antes del 1° de octubre de 1991, y que, de no hacerlo, prescribiría la acción reivindicatoria. El Estado Parte aduce que los autores no cumplieron esa condición y presentaron directamente su demanda ante el tribunal de distrito el 31 de octubre de 1995, después de haber vencido el plazo de un año establecido en el párrafo 4 del artículo 5 de la ley, donde se dispone que, en el supuesto de que la persona obligada a restituir el bien rechace la solicitud formulada de conformidad con el párrafo 2, los titulares del derecho a la restitución podrán presentar una demanda ante el tribunal en el plazo de un año, es decir, hasta el 1° de abril de 1992.

Comentarios de los autores

5.1. El 29 de agosto de 2007, los autores presentaron sus comentarios sobre la respuesta del Estado Parte. En cuanto al argumento del Estado Parte de que la presentación de su comunicación equivale a un abuso del derecho a presentar comunicaciones, los solicitantes afirman que la demora se justifica por el hecho de que el abogado de la República Checa no les informó de la posibilidad de recurrir al Comité. De hecho, después de que el tribunal checo desestimara su solicitud de restitución en 1998, el abogado les aconsejó que abandonaran el caso. Los autores, que tenían 78 y 74 años de edad, respectivamente, y que carecen de formación jurídica, no tuvieron conocimiento de la jurisprudencia del Comité sobre la restitución de bienes hasta 2005, a través de Internet. El 30 de marzo de 2006 escribieron al Comité, que les pidió que presentaran información adicional. Inmediatamente después, contrataron a un abogado en los Estados Unidos a fin de someter el asunto al Comité.

5.2. Los autores reiteran que, habida cuenta de la jurisprudencia claramente establecida por el Comité en la materia objeto del presente caso, el Estado Parte ha violado el artículo 26.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1. Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

6.3. En lo que respecta al requisito del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el Comité observa que el Estado Parte no ha impugnado el argumento de los autores de que en su caso no hay recursos de la jurisdicción interna disponibles y efectivos. En este contexto, el Comité recuerda que hay que agotar únicamente los recursos tanto disponibles como efectivos. La legislación aplicable a la propiedad confiscada no permite la restitución de los bienes a los

autores ni una indemnización. Después de la sentencia del tribunal de distrito de Uherske Hradiste de 4 de febrero de 1998, que rechazó la demanda de restitución de los bienes de los autores, éstos no tenían ningún recurso jurisdiccional efectivo ni verdaderamente disponible al que recurrir dentro del sistema jurídico checo. Por decisión N° 185/1997, el Tribunal Constitucional de la República Checa confirmó que consideraba que exigir la nacionalidad para obtener la restitución de los bienes era razonable². A este respecto, el Comité reitera que cuando el máximo tribunal nacional ha resuelto sobre el asunto que motivó el caso, eliminándose así cualquier posibilidad de que pueda recurrirse con éxito a un tribunal nacional, el autor no está obligado a agotar los recursos de la jurisdicción interna a los efectos del Protocolo Facultativo³. Por consiguiente, el Comité considera que los autores han fundamentado suficientemente que hubiera sido inútil que impugnaran la sentencia sobre su caso.

6.4. El Comité ha tomado nota del argumento del Estado Parte de que debería considerarse inadmisible la comunicación porque constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones según lo establecido en el artículo 3 del Protocolo Facultativo, a la vista de la demora excesiva en la presentación de la comunicación al Comité. El Estado Parte afirma que los autores esperaron ocho años y dos meses después de la sentencia del tribunal de distrito para presentar su reclamación al Comité. El Comité reitera que el Protocolo Facultativo no establece ningún plazo para la presentación de comunicaciones y que el período de tiempo que transcurra antes de hacerlo, salvo en casos excepcionales, no constituye en sí mismo un abuso del derecho de presentar una comunicación. En el presente caso, en que el abogado aconsejó a los autores que abandonaran el asunto en 1998 y éstos no tuvieron conocimiento de la jurisprudencia del Comité sobre la restitución de bienes hasta 2005, el Comité no considera que la demora de ocho años constituya un abuso del derecho de presentar esas comunicaciones⁴. Por consiguiente, decide que la comunicación es admisible en la medida en que parece plantear cuestiones en relación con el artículo 26 del Pacto.

² "El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula el principio de igualdad en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26. Este derecho de igualdad, tal como se enuncia en el artículo 2, es de naturaleza accesoria, es decir, se aplica solamente en conjunción con otro derecho consagrado en el Pacto. El Pacto no estipula el derecho de propiedad. El artículo 26 estipula la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. La ciudadanía no está incluida en la lista ilustrativa de motivos de discriminación prohibidos. El Comité de Derechos Humanos ha admitido reiteradamente la diferencia basada en criterios razonables y objetivos. El Tribunal Constitucional considera que las consecuencias del párrafo 2 del artículo 11 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales^[2], así como los objetivos de las leyes de restitución y las leyes relativas a la ciudadanía, son criterios razonables y objetivos."

³ Comunicación N° 1095/2002, *Bernardino Gomariz Valera c. España*, dictamen aprobado el 22 de julio de 2005, párr. 6.4.

⁴ Véase la comunicación N° 1305/2004, *Víctor Villamón Ventura c. España*, dictamen de 31 de octubre de 2006, párr. 6.4; y la comunicación N° 1101/2002, *Alba Cabriada c. España*, dictamen de 1° de noviembre de 2004, párr. 6.3.

Examen del fondo de la cuestión

7.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta la información que le han facilitado las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2. El Comité debe decidir si la aplicación de la Ley N° 87/1991 a los autores equivale a una discriminación que vulnera el artículo 26 del Pacto. El Comité reitera su jurisprudencia de que no todas las diferencias de trato se pueden considerar discriminatorias a tenor del artículo 26. Una diferencia que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en criterios razonables y objetivos no constituye una discriminación prohibida en el sentido del artículo 26⁵.

7.3. El Comité recuerda sus dictámenes en los casos de *Adam, Blazek, Marik Kriz y Gratzinger*⁶, en los que sostuvo que se había producido una violación del artículo 26. Considerando que el propio Estado Parte es responsable de la partida de los autores y de su familia de Checoslovaquia para buscar refugio en otro país, donde finalmente establecieron su residencia permanente y obtuvieron una nueva ciudadanía, el Comité considera que sería incompatible con el Pacto exigir a los autores que satisfagan el requisito de la ciudadanía checa como condición previa para la restitución de los bienes o para el pago de una indemnización.

7.4. El Comité estima que el principio establecido en los casos citados se aplica también a los autores de la presente comunicación, y que la aplicación por los tribunales internos del requisito de ciudadanía viola sus derechos a tenor del artículo 26 del Pacto.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 26 del Pacto.

9. A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a los autores una reparación efectiva, que incluya una indemnización si la restitución de los bienes no es posible. El Comité reitera que el Estado Parte debería modificar su legislación para velar por que todas las personas gocen de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley.

⁵ Véase la comunicación N° 182/1984, *Zwaan-de Vries c. los Países Bajos*, dictamen aprobado el 9 de abril de 1987, párr. 13.

⁶ Véase la comunicación N° 586/1994, *Adam c. la República Checa*, dictamen emitido el 23 de julio de 1996, párr. 12.6; la comunicación N° 857/1999, *Blazek c. la República Checa*, dictamen emitido el 12 de julio de 2001, párr. 5.8; la comunicación N° 945/2000, *Marik c. la República Checa*, dictamen emitido el 26 de julio de 2005, párr. 6.4; la comunicación N° 1054/2002, *Kriz c. la República Checa*, dictamen emitido el 1° de noviembre de 2005, párr. 7.3; y la comunicación N° 1463/2006, *Gratzinger c. la República Checa*, dictamen emitido el 25 de octubre de 2007, párr. 7.5.

10. Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

APÉNDICE

Opinión disidente del Sr. Abdelfattah Amor

Ocho años y dos meses después de haber agotado los recursos disponibles efectivos, los autores se dirigieron al Comité. Este retraso no constituye, a juicio del Comité y en contra del parecer del Estado, un abuso del derecho a presentar comunicaciones. En consecuencia, se declara admisible la comunicación.

No comparto esa apreciación del Comité, que me lleva a formular tres observaciones.

En primer lugar, es cierto que el Protocolo Facultativo no fija ningún plazo para presentar una comunicación, pero indica en su artículo 3 que "el Comité considerará inadmisibles todas las comunicaciones [...] que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones". Evidentemente, el Protocolo, sin resolver la cuestión de los plazos que pueden mediar el agotamiento de los recursos internos disponibles efectivos y la presentación de las comunicaciones, invita al Comité a hacer frente a los casos de abuso cuya apreciación le incumbe en el desempeño de las funciones que tiene conferidas. Es decir, que no sólo no se prohíbe al Comité fijar un plazo para la presentación de las comunicaciones, sino que, antes bien, se lo invita a fijarlo. El Comité lo ha hecho, en repetidas ocasiones, en el marco de su jurisprudencia, como se explicará ulteriormente. A mi juicio, el Comité, que puede decidir libremente sobre su reglamento interno, que básicamente es un reglamento de procedimiento, puede establecer reglas formales precisas en lo tocante a la cuestión de los plazos en relación tanto con el agotamiento de los recursos internos como con el fin del procedimiento de examen por una instancia internacional de investigación o de solución distinta del Comité. Por ello, es conveniente que lo haga, y que lo haga cuanto antes.

Está en juego el interés de los demandantes, que conocerán con claridad y antelación sus derechos y los límites de éstos.

También está en juego la seguridad jurídica, que no puede seguir estando expuesta injustificadamente a imponderables, y no es casualidad que la admisibilidad de los procedimientos esté sometida, tanto en el derecho interno como muy a menudo en el derecho internacional, a restricciones como los plazos y los límites temporales. Al respecto cabe recordar que el plazo de presentación de las peticiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de seis meses a partir del agotamiento de los recursos internos.

Por último, está en juego la credibilidad del propio Comité, el acceso al cual no puede dejarse a ecuaciones temporales y personales que conjuguen el pasado -incluso remoto- con el presente perfecto y la objetivización del derecho vigente, si no subjetivo al menos muy relativo. Es hora de que se racionalice este aspecto del procedimiento del Comité, de que cesen las vacilaciones y de que se establezca la coherencia necesaria.

En segundo lugar, en el marco de su jurisprudencia, el Comité ha tenido que resolver la cuestión de los plazos en su relación con el abuso de derecho.

En la comunicación 1076/2002, *KaspEr y Sopanen c. Finlandia*, el Comité, tras observar que las autoras presentaron su comunicación un año después de que la Comisión Europea de

Derechos Humanos hubiese declarado su solicitud inadmisible *ratione temporis*, consideró que, dadas las circunstancias especiales que concurrían en el caso, "el retraso en la presentación de la comunicación al Comité no es tal que constituya un abuso del derecho de presentación".

En la comunicación 1101/2002, *Alba Cabriada c. España*, el Comité observó que el lapso de tiempo transcurrido antes de presentar una comunicación (en este caso, dos años y medio), salvo casos excepcionales, no suponía de por sí un abuso del derecho a presentar comunicaciones. El Comité añadió, además, que el "Estado Parte tampoco ha fundamentado debidamente por qué considera que una demora de más de dos años sería excesiva en este caso".

En una tercera comunicación, en la que el plazo era de tres años y cinco meses (comunicación 1445/2006, *Polacková y Polacek c. la República Checa*), el Comité la declaró admisible porque no estimó que "la demora [hubiera] sido tan excesiva como para constituir un abuso del derecho a presentar una comunicación".

Por otro lado, se han declarado inadmisibles comunicaciones en las que se rebasaba el plazo considerado razonable por el Comité. Así ocurrió en varios casos.

En la comunicación 1434/2005, *Fillacier c. Francia*, el Comité observó que, en ese caso, la decisión del Consejo de Estado era del 8 de junio de 1990, es decir, más de 15 años antes de que la comunicación fuera sometida al Comité, y consideró que un plazo tan prolongado equivalía a un abuso del derecho de queja. El Comité concluye que "la comunicación [era] inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo [...]".

En la comunicación 1452/2006, *Chytil c. la República Checa*, el Comité, tras haber tomado nota de que "pasó un período de casi diez años hasta que el autor presentó su caso al Comité", "consider[ó] que el retraso [era] lo suficientemente excesivo e irrazonable para equivaler a un abuso del derecho a presentar comunicaciones, y declar[ó] la comunicación inadmisible con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo".

Por último, en la comunicación 787/1997, *Gobin c. Mauricio*, el Comité opinó que "se deb[ía] considerar un abuso del derecho correspondiente la presentación de la comunicación una vez transcurrido ese lapso" (cinco años), "de modo que la comunicación [era] inadmisible con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo".

Se constatará que el Comité ha considerado que unos plazos de 15, 10 y 5 años eran plazos irrazonables y excesivos, por lo que constituían un abuso del derecho de queja que entrañaba la inadmisibilidad. Por otra parte, a juicio del Comité unos plazos de tres años y cinco meses, de dos años y de un año, no son ni irrazonables ni excesivos, por lo que no constituyen un abuso del derecho de queja ni suponen un obstáculo para su admisión a trámite.

En cambio, en el asunto que ocupa al Comité, el caso *Ondracka*, el Comité no considera que "la demora de *ocho años* constituya un abuso del derecho de presentar esas comunicaciones. Por consiguiente, decide que la comunicación es admisible".

En tercer lugar, el Comité estima, con razón, que, cuando esté justificada la duración del plazo que medie entre el agotamiento de los recursos disponibles efectivos y la presentación de la comunicación, no puede considerarse que se trate de un abuso del derecho a presentar una

queja. La falta de explicación no es óbice para la admisibilidad cuando el Estado no coopera, como en el caso de la comunicación 1134/2002, *Fongum Gorji-Dinka c. el Camerún*, donde la demora era de 12 años. La justificación se basa fundamentalmente en la explicación dada por el autor de la comunicación.

En el asunto *Chytil*, el autor "no ha explicado o justificado por qué esperó casi diez años para presentar sus reclamaciones al Comité". En los asuntos *Gobin* y *Fillacier* se hace la misma crítica: falta de explicación. En estos dos últimos asuntos, así como en el caso *Fongum Gorji-Dinka*, el Comité precisa, además, que la explicación debe ser convincente, condición que no se había exigido en todos los casos en los que se admitió el abuso del derecho a presentar comunicaciones. El Comité no define *a priori* las condiciones para considerar convincente una explicación. Sin embargo, su examen de los hechos y de los elementos aportados a los efectos de la admisibilidad lo lleva a hacerse una opinión sobre si la explicación es convincente o no. Sin embargo, esta forma de proceder es muy resbaladiza a ese nivel y no está al abrigo de apreciaciones subjetivas y variables, hasta el punto de que algunos podrían decir que, para el Comité, aritméticamente, un período de ocho años y dos meses es inferior a un período de cinco años. Así, en el asunto *Gobin*, la explicación dada por el autor era que su hijo había descubierto el procedimiento de queja individual del Comité mientras cursaba estudios de derecho. En la comunicación *Ondracka* que se examina, el Comité considera que no hay abuso del derecho y declara que la comunicación es admisible, dado que "el abogado aconsejó a los autores que abandonaran el asunto en 1998 y éstos no tuvieron conocimiento de la jurisprudencia del Comité sobre la restitución de bienes hasta 2005". Se trata de una curiosa explicación, que hace que el Comité pueda juzgar los consejos dados por los abogados y que hace que el descubrimiento de la jurisprudencia del Comité sea un argumento convincente.

Siempre habrá personas de buena voluntad y de buena fe que descubran tarde o temprano la jurisprudencia del Comité. En definitiva, no cabe esperar que todos conozcan la ley ni tampoco que conozcan la jurisprudencia del Comité... hasta que descubren las ventajas de ambas para su propio beneficio. Esto queda a la apreciación del Comité. Y en el presente caso el Comité ha hecho esa apreciación, de una manera curiosa... de una manera cuyo carácter objetivo y razonable dista mucho de ser evidente, a mi juicio. Cabe decir que urge que el Comité se ponga al abrigo de apreciaciones discutibles y de incoherencias estableciendo, como tiene derecho a hacer, reglas formales y claras sobre el plazo de presentación de las comunicaciones.

(Firmado): Sr. Abdelfattah Amor

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la francesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso en el informe anual del Comité a la Asamblea General.]
